

Santiago, siete de diciembre de dos mil veintiuno.

**Vistos:**

En autos Rit T-19-2019, Ruc 1940021595-8, del Juzgado de Letras del Trabajo de Villa Alemana, doña Paulina Cánepa Beltrán dedujo denuncia de tutela laboral con ocasión del despido, en subsidio de nulidad de despido, despido injustificado y cobro de prestaciones en contra de la Ilustre Municipalidad de Villa Alemana.

Por sentencia de veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, en lo pertinente, se rechazó la demanda de tutela, y se acogió la demanda de despido injustificado, declarándose que existió una relación laboral entre las partes y condenando a la demandada al pago de la indemnización sustitutiva, a la de años de servicio, al recargo legal y al feriado demandado.

En contra del pronunciamiento de base, la demandada dedujo recurso de nulidad, invocando como motivo principal de invalidación el contemplado en el artículo 477 del Código del Trabajo en relación con los artículos 3 y 4 de la Ley N°18.883, los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, los artículos 2006 y siguientes del Código Civil y 1, 7 y 420 del Código del Trabajo. En subsidio, interpuso su recurso por la causal del artículo 478 letra b) de este último cuerpo legal.

La Corte de Apelaciones de Valparaíso, mediante fallo de diez de marzo de dos mil veinte, rechazó dicho recurso de nulidad.

En contra de esta última resolución, la parte demandada dedujo recurso de unificación de jurisprudencia, solicitando que se lo acoja y se dicte la correspondiente de reemplazo, con arreglo a la ley.

Se ordenó traer los autos en relación.

**Considerando:**

**Primero:** Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 483 y 483 A del Código del Trabajo, el recurso de unificación de jurisprudencia procede cuando respecto de la materia de derecho objeto del juicio existieren distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de tribunales superiores de justicia. La presentación respectiva debe ser fundada, incluir una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones respecto del asunto de que se trate sostenidas en las mencionadas resoluciones y que haya sido objeto de la sentencia contra la que se recurre y, por último, acompañar copia fidedigna del o de los fallos que se invocan como fundamento.



**Segundo:** Que la parte demandada propone como materia de derecho objeto del juicio, el *“determinar qué estatuto jurídico regula la vinculación que se genera entre una persona natural que se desempeña en una entidad perteneciente a la Administración del Estado (en este caso en una Municipalidad) y ésta última, cuando su ejercicio no se encuadra aparentemente en los términos de la normativa conforme a la cual se incorporó a dicha dotación”*.

**Tercero:** Que el recurrente expone que la correcta interpretación en este caso corresponde a aplicar la normativa específica que regula las contrataciones a honorarios en una municipalidad, conforme lo faculta el artículo 4° de la Ley N°18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios municipales.

Para dichos efectos, cita un fallo dictado por esta Corte, rol 24.904-2014, del que transcribe las motivaciones pertinentes que contienen el criterio jurisprudencial que considera correcto, esto es, que no corresponde calificar como vínculos laborales a las relaciones habidas entre una persona natural y un órgano de la Administración del Estado, en la medida que dichas vinculaciones se desarrollen dentro del marco legal que establece el artículo 4 de la Ley 18.883, que autoriza la contratación sobre la base de honorarios ajustada a las condiciones que dicha norma describe, y que se conformen a las exigencias del legislador laboral para los efectos de entenderlas reguladas por la codificación correspondiente.

**Cuarto:** Que de la lectura del fallo presentado para su comparación con el que se impugna, surge que el presupuesto fáctico común y esencial consiste en que los actores no tenían la calidad de funcionarios o trabajadores del Municipio demandado, sino la de contratados sobre la base de honorarios de acuerdo con el artículo 4° de la referida Ley N°18.883, la que excluye la condición de funcionarios afectos a este Estatuto Administrativo y los somete exclusivamente a las normas contenidas en el respectivo contrato de prestación de servicios.

En efecto, de acuerdo con los antecedentes que se transcriben en la sentencia individualizada, además de lo anterior, se estimó que las labores para las que fueron contratados los actores, sin analizarlas pormenorizadamente, se trataron de cometidos específicos, respecto a los cuales no opera el requisito de accidentalidad y que la demandada no extralimitó el marco legal que la regula.

**Quinto:** Que, por otra parte, en el caso en estudio, los hechos determinados por el sentenciador del grado dieron cuenta de que las circunstancias fácticas verificadas, en orden a que la actora estaba sujeta a una



dirección a cargo de la Municipalidad demandada, percibía una remuneración estable y se desempeñaba en una jornada de trabajo en las dependencias municipales, permitieron concluir que en los hechos estaba ligada por un contrato de trabajo, pues a su respecto, se reúnen todos y cada uno de los requisitos para estimar que dicha relación contractual es de carácter laboral, al prestar servicios remunerados bajo subordinación y dependencia de forma permanente, la cual además tuvo una larga duración entre el 22 de enero de 2016 y el 31 de junio de 2019, fecha en que se comunicó el término de sus funciones.

**Sexto:** Que, para la procedencia del recurso en análisis, es requisito esencial que existan distintas interpretaciones respecto de una materia de derecho, esto es, que frente a hechos, fundamentos o pretensiones sustancialmente iguales u homologables, se haya arribado a concepciones o planteamientos jurídicos disímiles, que denoten una divergencia doctrinal que debe ser resuelta y uniformada.

**Séptimo:** Que para dar lugar, entonces, a la unificación de jurisprudencia, se requiere analizar si los hechos establecidos en el pronunciamiento que se reprocha, subsumibles en las normas, reglas o principios cuestionados como objeto del arbitrio, son claramente comparables con aquellos materia de las sentencias que se incorporan al recurso para su contraste.

Así, la labor que le corresponde a esta Corte se vincula con el esclarecimiento del sentido y alcance que tiene la norma jurídica que regla la controversia, al ser enfrentada con una situación equivalente a la resuelta en un fallo anterior en sentido diverso, para lo cual es menester partir de presupuestos fácticos análogos entre el impugnado y aquellos traídos como criterios de referencia.

**Octavo:** Que a la luz de lo expuesto y realizado el examen de la concurrencia de los presupuestos enunciados precedentemente, tal exigencia no aparece cumplida en la especie, desde que la situación planteada en autos no es posible de equiparar con la del fallo que ha servido de sustento al recurso en análisis, pues como se dijo, se advierte que en el presente caso, se determinó que la actora se desempeñó como abogada en el Centro de la Mujer de la demandada realizando atención de usuarias, llevando el patrocinio y representación en materias propias de dicho centro, participando en actividades de intervención a mujeres de forma permanente y estable en dicho cargo, entre otras.

Por otro lado, en el fallo de contraste, no se discurrió respecto de las



funciones particulares que desempeñaban los actores, limitándose a establecerse que en la especie no podía recibir aplicación la regla que se consigna en el inciso tercero del artículo 1° del Código del Trabajo, según la cual, “los trabajadores” de las entidades señaladas en el inciso precedente -entre ellas las que integran la Administración del Estado- se sujetarán a las normas de dicho Código en las materias o aspectos no regulados en sus respectivos estatutos, siempre que ellas no fueren contrarias a estos últimos, al concluir que ellos no tenían la calidad de funcionarios o trabajadores del Municipio demandado, sino la de contratados sobre la base de honorarios de acuerdo con el artículo 4° de la referida Ley N°18.883, la que excluye la condición de funcionarios afectos a este Estatuto Administrativo y los somete exclusivamente a las normas contenidas en el respectivo contrato de prestación de servicios

**Noveno:** Que, como se puede advertir, puede sostenerse que en el fallo traído en contraste no se analizaron las funciones propias de los demandantes, lo que llevó a concluir la inaplicabilidad de las normas laborales a su respecto, situación que no ocurre en el presente caso, en donde existió dicho análisis, y que llevó a concluir a los jueces del fondo la aplicación de las normas del Código del Trabajo en relación con la demandante.

**Décimo:** Que, de lo expuesto, queda de manifiesto que el fallo acompañado no contiene una distinta interpretación sobre la materia de derecho objeto de este juicio, toda vez que resuelven sobre la base de circunstancias fácticas diversas a aquéllas planteadas y establecidas en la resolución aquí impugnada, no cumpliéndose con el presupuesto contemplado en el inciso 2° del artículo 483 del Código del Trabajo, lo que conduce a desestimar el presente recurso de unificación de jurisprudencia.

Por estas consideraciones y en conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 483 y siguientes del Código del ramo, **se rechaza** el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia dictada con fecha diez de marzo de dos mil veinte, por la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

Regístrese y devuélvase.

Rol N°39.591-2020

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los ministros señora Andrea Muñoz S., ministros suplentes señores Rodrigo Biel M., Mario Gómez M., y los Abogados Integrantes señor Gonzalo Ruz L., y señora Leonor



Etcheberry C. No firma la ministra señora Muñoz y el ministro suplente señor Biel, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar con permiso la primera y por haber terminado su periodo de suplencia el segundo. Santiago, siete de diciembre de dos mil veintiuno.



En Santiago, a siete de diciembre de dos mil veintiuno, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

